

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se ha podido apreciar cómo la violencia se convirtió en un ritual de las elecciones, lo que favoreció que los sectores populares participaran como electores o como “malhechores”, en el afianzamiento o el enfrentamiento al poder. De esta forma, tanto las urnas como las armas promovieron la participación de la sociedad en la defensa de unos intereses partidistas o por lealtad con el gamonal o líder político y, simultáneamente, le permitieron a la población asumir el sentido de la ciudadanía y de lo público como expresión colectiva.

En Boyacá, los sectores populares vivieron la política en torno a las riñas partidistas entre liberales y conservadores, que fueron asumidas desde la cotidianidad como rojo y azul; con este antagonismo le dieron significado político a las elecciones a manera de instrumento para legitimar el poder, que a la vez definía las relaciones entre Estado y sociedad. De esta forma, los procesos electorales involucraron tanto al elector como al excluido, al acudir a las urnas o utilizar el fraude y la violencia para garantizar el triunfo del liberalismo, en un mundo simbólico de lealtades y representaciones que les ayudó a interiorizar, en forma legal o ilegal, su papel político en la construcción de bases sociales de apoyo fundamentales para afianzar el régimen.

Las elecciones efectuadas durante la República Liberal en Boyacá fueron más violentas que en otras regiones del país, por el

tradicionalismo en la forma de abordar los conflictos; es decir, por la fusión entre la política y la guerra como dos procesos conjuntos fundamentales para definir el poder. En primer lugar, porque los partidos políticos se organizaron a partir de la estructura social tradicional: gamonalismo, caciquismo, compadrazgo y priorazgo, que hacía ver las relaciones políticas como un sistema de lealtades; en segundo lugar, porque Boyacá, para la época, no contaba con un proceso de industrialización que ofreciera posibilidades económicas, entonces la burocracia fue maleable a los intereses de los líderes políticos, al igual que los servicios que prestaban las instituciones; precisamente las primeras confrontaciones a nivel local y regional se presentaron por el control de la administración local. Adicionalmente, porque en el desarrollo de las elecciones se combinaron tácticas tradicionales y de modernización de la política que involucraron a todos los sectores sociales, ya como espectadores, como agresores o como funcionarios, en el que fue crucial la labor del gamonal y líder político, del clero y de la fuerza pública, en definir al enemigo político e iniciar una intensa campaña para combatirlo y favorecer la homogenización de los resultados electorales; de esta forma podemos ver que se conserva el sentido de la lealtad partidista.

En términos de la modernización, es de anotar que los líderes políticos recibieron influencia de ideologías nacionalistas y totalitarias que incidieron tanto en los discursos como en las prácticas. Precisamente, a partir de 1930 se adoptaron los desfiles, manifestaciones y visitas de los dirigentes políticos a las localidades, lo que favoreció el “acercamiento” de la élite política con el pueblo. En estos eventos se pronunciaron elocuentes discursos en los que se reivindicó a los sectores populares y se les motivó a seguir a un candidato y a un partido. Además, las campañas estuvieron auspiciadas por medios de comunicación, radio y prensa, que le permitían a la población mantenerse informada sobre la situación del gobierno y las proyecciones del partido.

Estos factores incidieron para que las elecciones estuvieran acompañadas por un alto índice de violencia; de esta forma, los grupos políticos legalizaron en las urnas la “democratización” que con las armas vivieron los habitantes en los campos y veredas. Vale anotar que, aunque viciados e intransigentes, los procesos electorales fueron el mecanismo de legitimación y afianzamiento del poder.

Las tácticas implementadas por los gobiernos liberales en su momento se orientaron a dar “garantías” para la emisión del sufragio, que consistieron en reemplazar la labor de civiles por militares o militarización de la burocracia; incrementar del pie de fuerza, especialmente en periodos electorales y en localidades de filiación conservadora; coaccionar al adversario y crear la policía cívica para vigilar los procesos electorales. Esta última táctica oficializó las formas de resistencia armada y promovió las primeras manifestaciones de choque en las poblaciones que se opusieron a la posesión de funcionarios de filiación liberal.

Durante la hegemonía liberal se hicieron varias reformas con las que se pretendía garantizar la emisión libre del sufragio; en la práctica, la cédula electoral, los censos, la tinta indeleble y demás estrategias fueron solamente medidas tomadas por el gobierno que le sirvieron de base al adversario para denunciar corrupción y construir sus propias tácticas de acceso al poder. Esto hizo que el fraude y la violencia fueran cometidos en forma simultánea por quienes hacían parte del gobierno y por quienes aspiraban al poder, pero, generalmente, los perdedores denunciaban las irregularidades como atentados contra el sufragio y se presentaban como honorables y salvadores de la democracia.

Durante la celebración de los comicios podían ocurrir varias cosas, entre estas: adulteración de los censos electorales, retención y falsificación de la cédula electoral para evitar que el adversario acudiera a las urnas, voto de los menores, voto

múltiple, hechos de violencia, robo de urnas, ubicación de la fuerza pública en sitios estratégicos para controlar la emisión del sufragio y para coaccionar al adversario. Generalmente el “gobierno elector” utilizó las instituciones y los funcionarios para controlar la expresión del sufragio y garantizar el triunfo de sus candidatos o “fraude burocrático”.

En la política nacional hubo una fuerte influencia de las tendencias nacionalistas y totalitarias que permearon la ideología de los líderes del liberalismo de izquierda y del conservatismo de ultraderecha. Estas dos tendencias afianzaron sus principios en términos de revolución y rescate del tradicionalismo (orden), cuyos proyectos políticos de orientación socialista y fascista le dieron otra dirección al antagonismo bipartidista, a la construcción del enemigo político, a la relación política de dependencia en torno al gamonal; en estos nuevos proyectos, los sectores populares eran actores centrales tanto por la participación en las urnas como por su beligerancia con las armas.

El programa de gobierno “la revolución en marcha” fue visto con preocupación por la élite liberal y conservadora y sobre todo por la Iglesia, porque desde el Estado se impulsaron una serie de reformas de orientación social con miras a promover la modernización. Mientras para la élite tradicional los planteamientos revolucionarios eran asociados básicamente con el comunismo y con las transformaciones que se estaban desarrollando simultáneamente en otros Estados, donde se adoptaban tendencias socialistas o de orientación liberal republicana.

Un hecho crucial que polarizó las relaciones entre el liberalismo social reformista y el conservatismo de ultraderecha o fascista fue la masacre de Gachetá (1939), que se cometió cuando el gobierno de conciliación de Eduardo Santos, ofreció garantías al adversario para el regreso a las urnas, pero al iniciarse la campaña conservadora se produjo una lluvia de disparos oficiales contra

los manifestantes. A partir de estos hechos, el conservatismo proclamó la legítima defensa; además, incorporó un lenguaje social-nacionalista que pretendía incentivar la producción interna, garantizar la conservación del orden y evitar a toda costa la expansión de ideas socialistas (liberalismo social y comunismo). En otras palabras, la dicotomía entre liberales y conservadores se trasladó al discurso de los defensores de la república (revolución) y los que abogaban por un gobierno autoritario.

La segunda administración de López Pumarejo significó el afianzamiento del proyecto reformista, que dinamizó la polémica en el liberalismo, motivó las críticas del conservatismo y generó expectativa en los sectores populares. Con relación al conservatismo, en términos electorales, ganó posiciones, pero el mayor impacto lo tuvo en la opinión pública con las constantes críticas al gobierno, con el cuestionamiento a la acción del presidente y de los funcionarios, lo que en forma simultánea motivó a muchos lopistas a controvertir al presidente. De esta forma, influyó en el debilitamiento y caída de la República Liberal, que dio paso a otro sistema de gobierno.

En el desarrollo de las elecciones y de la violencia política, la Iglesia jugó un papel importante, no solamente en el control y condicionamiento de las clases populares, sino desde la definición de candidatos y líderes políticos. Y cuando vio amenazado su poder con el programa "La revolución en marcha", inició una intensa campaña contra el liberalismo y el comunismo y, por medio de la acción social logró capturar la atención de los sectores populares. Por su parte, el conservatismo de ultraderecha, cuya pretensión era consolidar un gobierno de orientación cristiana, encontró gran respaldo en la Iglesia y decidió por todos los medios conquistar el poder.

El papel de la Iglesia fue tan importante en la estructuración y en la concepción de la sociedad que, incluso los liberales, en contra

del discurso, no eran ateos o beligerantes frente a la Iglesia; por ejemplo, en Boyacá, la mayoría de la población aceptaba el poder de la Iglesia y participaba de los diversos rituales, fiestas religiosas y, sobre todo, practicaba los sacramentos. De otra parte, con el diseño de programas como la acción social, la Iglesia buscó atraer la atención de sindicatos y sectores populares de orientación liberal y comunista. Igualmente, se aprovechó del espacio espiritual en las misas, sermones dominicales y administración de sacramentos para condicionar la voluntad del elector.

Otro de los agentes que contribuyó a afianzar el poder, fue la fuerza pública. El poder se reflejó desde la ubicación para la “defensa” el día de los comicios, desde allí se puso en vigencia el micropoder como parte de un escenario público con el que se pretendía consolidar una gran célula para evitar el acceso del adversario a las urnas; precisamente, la distribución por cuadros facilitó el establecimiento de redes de control y protección a los copartidarios, mientras para el adversario era una forma de intimidación que lo llevaba a reaccionar, podía ser abandonando el recinto o consolidando otra fuerza beligerante que controvirtiera la coacción.